

Capítulo 9

Geopolítica de los movimientos sociales y los bienes comunes

Tal como hemos comprobado en páginas anteriores, existe una sugestiva superposición geográfica entre las áreas de intensa actividad extractivista (sobre todo minera y, en menor medida, agraria), los movimientos sociales de resistencia y combate a la desposesión, y la presencia militar estadounidense, sea bajo la forma de bases, misiones y ejercicios conjuntos. En este capítulo abordaremos de forma sintética la cuestión de las resistencias populares desencadenadas por la ofensiva imperialista. Y subrayamos lo de "sintética" porque su tratamiento más detallado lo hallará el lector en el Apéndice de este libro, en un texto especialmente preparado por un equipo de especialistas en la materia¹⁹¹.

Hechas las clarificaciones pertinentes, es hora de ir al grano. Mónica Bruckmann y Theotonio dos Santos han escrito recientemente un trabajo que ofrece una sugerente visión panorámica e histórica de la cuestión de los movimientos sociales en su articulación con las luchas políticas de la época. Raúl Zibechi, a su vez, ha elaborado una serie de tesis sobre el papel y las características de los movimientos sociales en la América Latina contemporánea, con cuya revisión queremos dar comienzo a este capítulo¹⁹².

191 Resulta indispensable mencionar aquí el significativo aporte efectuado para el conocimiento de esta temática por el Observatorio Social de América Latina (OSAL), creado en el año 2000 durante nuestra gestión al frente de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO. El OSAL, que no por casualidad vio la luz durante el lanzamiento de la ofensiva extractivista que está asolando la región, tiene por propósito llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de las luchas y resistencias populares. A partir de 2007 se introdujeron numerosos cambios en el proyecto original del OSAL que perjudicaron en buena medida la continuidad de la obra iniciada en 2000 y la comparabilidad de los datos pacientemente recogidos en aquellos años. No obstante, sigue siendo una valiosa fuente de información para el estudio de los movimientos sociales de la región. La colección completa puede ser consultada en línea en <www.clacso.org.ar/institucional/1h3.php>.

192 "Los movimientos sociales en América Latina: un balance histórico", de Mónica Bruckmann y Theotonio dos Santos, en *Revista Prokla*, N° 142, en <www.medelu.org/Los-movimientos-sociales-en>; y "Los movimientos sociales latinoamericanos:

Según este autor, los movimientos sociales más importantes de la región brotaron de tres principales fuentes sociopolíticas e ideológicas: “las comunidades eclesiales de base vinculadas a la teología de la liberación; la insurgencia indígena portadora de una cosmovisión distinta de la occidental; y el guevarismo inspirador de la militancia revolucionaria”. Dicho de modo sucinto, Zibechi plantea con razón que estos movimientos –entre los cuales sobresalen los Sin Tierra y, en menor medida, los *seringueiros* en Brasil; los indígenas ecuatorianos y bolivianos, amén de los mapuche en Chile; los zapatistas mexicanos; los guerreros del agua y los cocaleros también de Bolivia; los piqueteros argentinos y ciertos movimientos de mujeres en algunos países de la región– son creaciones originales de las luchas sociales latinoamericanas y que por esa misma razón se diferencian claramente de sus análogos en Europa o Estados Unidos. Señala que esos movimientos comparten una serie de rasgos comunes, a saber:

- a. Base territorial, en gran parte precipitada por la destrucción que las políticas neoliberales ocasionaron en sus clásicos *locus* de concentración: la fábrica (por la apertura económica indiscriminada, la desregulación, la precarización laboral, etcétera) y la hacienda tradicional (arrollada por el dinamismo del agrogocio), y los procesos de reestructuración capitalista desencadenados desde los años ochenta, todo lo cual dejó sin una sólida base de sustentación a las formas tradicionales de representación de los trabajadores urbanos, los sindicatos, y de los emergentes movimientos campesinos en el agro. Desplazadas de sus lugares de inserción laboral, las masas desposeídas se replegaron sobre su territorio y desde allí relanzaron sus propias organizaciones.
- b. Autonomía de los movimientos, tanto de los Estados como de los partidos políticos, así como la apelación a distintas estrategias para garantizar su subsistencia mediante comedores comunitarios, ollas populares, campamentos, cooperativas informales de trabajo y otras alternativas semejantes.
- c. Revalorización de la identidad y la cultura de los pueblos y los diversos sujetos sociales, en abierta oposición a las posturas “eurocéntricas” o “noratlántico-céntricas”, con todas sus cargas racistas tendientes a fomentar la autoinculpación de los pobres, los indios y en general todos los excluidos por su miserable inserción social.
- d. Capacidad para formar sus propios intelectuales, a partir de la extensión de los procesos de escolarización y educación universal

que permitió a los sectores oprimidos hacerse de las herramientas que antes sólo eran utilizadas por los grupos dominantes (si bien con el peligro de que junto a este proceso se produjese una inconsciente asimilación al *ethos* cultural y las categorías intelectuales de la clase dominante). Zibechi señala, como prueba de la importancia de este asunto, a la Universidad Intercultural de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas –que recoge la experiencia de la educación intercultural bilingüe en las casi 3 mil escuelas dirigidas por los pueblos indígenas en Ecuador–, y a los Sin Tierra de Brasil, que llevan adelante 1.500 escuelas en sus asentamientos, y múltiples espacios de formación de docentes, profesionales y militantes¹⁹³.

- e. Nuevo papel de las mujeres, que asumen a plenitud roles no tradicionales reservados hasta hace muy poco exclusivamente a los varones: diputadas, comandantes, dirigentes sociales entre la infinidad de movimientos sociales latinoamericanos. Agregaría: en el caso del MST brasileño, la representación absolutamente igualitaria en todos los cargos de conducción: 50% de varones y otro tanto de mujeres.
- f. Reorganización del trabajo, rechazando los modelos capitalistas y conscientes de que la propiedad social de los medios de producción no resuelve automáticamente sus problemas. Se puede tener la tierra, pero sin créditos para semillas, herramientas y maquinarias, el mantenimiento de esa propiedad no es viable. Además, los movimientos buscan promover “relaciones igualitarias y horizontales con escasa división del trabajo, asentadas por lo tanto en nuevas relaciones técnicas de producción que no generen alienación ni sean depredadoras del ambiente”.
- g. Apelación a nuevas formas de lucha, dado que la huelga, por ejemplo, deja de surtir efecto cuando quienes la utilizan son desocupados. Preferencia por las tomas de tierras, cortes de caminos, reapropiación de espacios concebidos como públicos (como hicieron las Madres con la Plaza de Mayo), o como “ajenos”, en el caso de espacios privados usurpados por las clases adineradas para construir residencias de alto precio, caminos, etcétera.

Ahora bien, todos estos rasgos unidos a la vitalidad y eficacia reivindicativa de los movimientos sociales y la inocultable crisis que corroe a los partidos políticos y los sistemas partidarios dieron origen a una actitud celebratoria –y en buena medida idealizada– de aquellos en la medida

tendencias y desafíos”, de Raúl Zibechi, en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 9, enero de 2003.

193 Ver “Los movimientos sociales como espacios educativos”, de Raúl Zibechi, Ponencia ante el Congreso Internacional de Sociología de la Educación, Buenos Aires, 25-28 de agosto de 2004.

en que, con justa razón, se les reconoce a los movimientos sociales el haber reintroducido “la calle y las plazas” en la acartonada vida política de nuestros países, ahogadas muy a menudo por una hiperinstitucionalización pseudodemocrática que mal puede ocultar el vaciamiento sustantivo sufrido por el proceso democrático. Esta imprevista (y no precisamente bienvenida) presencia de las masas en la calle –un hecho que, conviene recordarlo, había sido valorado por Maquiavelo en sus observaciones sobre la república romana como una vigorosa muestra de salud cívica– refleja la incapacidad de los dispositivos legales e institucionales de las “democracias” latinoamericanas para resolver las crisis sociopolíticas dentro de los procedimientos establecidos constitucionalmente. Reaparece así el fantasma de un “país real” divorciado del “país legal”, no sólo ajeno al primero, sino incapaz siquiera de contener sus más elementales reivindicaciones. Debido a esta escisión, la realidad de la vida política latinoamericana se mueve en una ambigua esfera en donde las fronteras de lo legal y lo ilegal se diluyen peligrosamente y arbitrariamente. Por ejemplo, en los procesos de toma de decisiones sobre importantes cuestiones económicas, la gravitación de los *lobbies* y los grupos de presión de las distintas fracciones de las clases dominantes o de los representantes del imperio convierte a las instituciones de la “democracia representativa”, a la presidencia y sobre todo al Parlamento, en un anodino ornamento estatal carente por completo de eficacia para resguardar el interés público y contener la voracidad de los sectores burgueses. Eso no sólo es ilegítimo, sino que también es ilegal, y sin embargo la oligarquía mediática los consideran una saludable muestra de “sensatez y realismo”, dado que según aquellos cualquier gobierno interesado en garantizar la “governabilidad” de la economía y la política tiene que saber escuchar lo que le reclama la “sociedad civil”, aunque quienes lo hagan no sean sino un grupo minoritario de esta caracterizado por su riqueza y su poderío. Pero la aplaudida ilegitimidad e ilegalidad de “los de arriba” se convierten en una afrenta intolerable cuando son las masas las que salen a la calle a presionar a las autoridades para defender sus intereses al margen de las instituciones mal llamadas “representativas”. En tal caso, no se ahorran epítetos y descalificaciones dirigidos a las “hordas insubordinadas”, mientras que la frágil y antidemocrática legalidad de las instituciones se derrite al calor de la crisis política permanente y el protagonismo de las masas.

Fue a causa de esta situación que revueltas populares derrocaron gobiernos reaccionarios en Ecuador en 1997, 2000 y 2005; y que en Bolivia sublevaciones de grandes masas de campesinos, indígenas y pobres urbanos hayan destronado a gobiernos derechistas en 2003 y 2005, abriendo paso a la formidable victoria electoral de Evo Morales a finales de 2005. La dictadura “constitucional” de Alberto Fujimori en Perú fue derrocada por una impresionante movilización de masas

durante el año 2000, y en 2001, el presidente de la supuesta “centroizquierda” de Argentina, Fernando de la Rúa, que había traicionado sus promesas electorales de abandonar las políticas neoliberales, fue desalojado del poder por uno de los mayores levantamientos populares de la Argentina contemporánea.

Más allá de la fragilidad del entramado institucional, lo que estas rebeliones populares –amén de otras, de las cuales no podemos dar cuenta aquí– comprueban es que este largo período de gobiernos neoliberales, con todo su bagaje de tensiones, rupturas, exclusiones y niveles crecientes de explotación y degradación social, creó las condiciones objetivas para la movilización política de grandes sectores de las sociedades latinoamericanas. Cabe pues preguntarse: ¿son estas revueltas plebeyas meros episodios aislados, gritos de rabia y furia popular, o reflejan una dialéctica histórica tendencialmente orientada hacia la reinención de la democracia, de “otra” democracia, genuina y no el simulacro con el que muchas veces se la confunde en estos días? Una mirada sobria a la historia del período abierto a comienzos de los años ochenta revela que no existe nada accidental en la creciente movilización de las clases populares ni en el final tumultuoso de tantos gobiernos democráticos en la región. Es por eso que entre 1985 y 2009 diecinueve presidentes –casi todos ellos obedientes clientes de Washington– tuvieron que apartarse del poder antes de la expiración de sus mandatos, depuestos por arrolladoras rebeliones populares¹⁹⁴.

Como si lo anterior no bastara, los plebiscitos convocados para legalizar la privatización de empresas estatales o servicios públicos invariablemente defraudaron las expectativas neoliberales: tal fue el caso de Uruguay (obras sanitarias y terminales portuarias) y los convocados para resolver la cuestión del abastecimiento de agua en Bolivia y Perú. También hubo grandes movilizaciones populares en diversos países para oponerse al ALCA o a la firma de TLC; para pedir la nacionalización del petróleo y el gas en Bolivia; resistir a políticas de privatización –del petróleo en Ecuador, la compañía telefónica en Costa Rica y los sistemas de salud en varios países–; poner fin al saqueo de los bancos, principalmente extranjeros, como en Argentina; y terminar con los programas de erradicación de coca en Bolivia y Perú. En los últimos años, se observa un relanzamiento de los movimientos sociales, que luego de 2005 habían padecido un proceso de desmovilización a nivel regional, con una sola

194 “Las consecuencias sobre el régimen de las interrupciones presidenciales en América Latina”, de Leiv Marsteintredet, en *América Latina Hoy* (Universidad de Salamanca) Nº 49, 2008, pág. 38. El autor cuenta 18, pero con posterioridad a la publicación de su artículo se produjo, en 2009, la destitución del presidente José Manuel “Mel” Zelaya en Honduras, con lo que la cifra asciende a 19, lo que arroja un promedio de casi un presidente derrocado por año.

gran excepción: el movimiento magisterial de Oaxaca, México, que llevó a cabo una heroica lucha contra el contubernio formado por el gobierno priísta del estado de Oaxaca y el nacional, en manos del Partido Acción Nacional (PAN). Pero recién a finales de la primera década del siglo XXI reaparecerían con renovado vigor nuevas protestas y resistencias populares: grandes movilizaciones estudiantiles en Chile primero y luego en Colombia; los movimientos de resistencia a los proyectos hidroeléctricos de la Amazonía y del sur de Chile; la lucha contra la megaminería a cielo abierto en el cordón andino, desde Colombia hasta Argentina, pasando por Perú, Ecuador y Bolivia, y, en este último país, las protestas masivas ocasionadas por el “gasolinazo” de diciembre de 2009 (que obligaron al gobierno a rever su decisión) y la más reciente desencadenada a propósito de la construcción de una carretera que transitaría por un territorio ancestral de los indígenas, el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, o TIPNIS, aún en debate en medio de fuertes protestas populares¹⁹⁵.

Tres ciclos de resistencia popular

A la luz de este breve *racconto* sería posible postular la existencia de tres ciclos demarcatorios de las resistencias y las luchas populares en los últimos veinte años, aproximadamente: un ciclo de ascenso de la lucha de masas, cuyo inicio podría datarse, con la inevitable subjetividad de este tipo de evaluaciones, el 1 de enero de 1994 con el levantamiento zapatista¹⁹⁶. Esto continuó y se expandió internacionalmente en la Batalla de Seattle (30 de noviembre de 1999), y se consolidó con la realización del Foro Social Mundial de Porto Alegre, en sus múltiples ediciones, a partir de 2001¹⁹⁷. Este ciclo ascendente impulsaría

195 Ver antecedentes más puntuales sobre este tema en “Las disputas sociopolíticas por los bienes comunes de la naturaleza: características, significación y desafíos en la construcción de Nuestra América”, op. cit.

196 No se podrían desconocer por lo menos dos antecedentes de importancia: el Caracazo de febrero de 1989 y las grandes revueltas populares que conmovieron a la Argentina a finales de junio y principios de julio de ese mismo año, las que precipitaron la entrega anticipada del mando al ganador de las elecciones presidenciales de mayo de ese año, Carlos S. Menem. Pero, en ambos casos, se trató de reacciones espontáneas producto de la desesperación, carentes de organicidad, y que, por eso mismo, no lograron alterar significativamente la situación preexistente. En el caso de Venezuela, se puede argumentar, razonablemente, que las traumáticas características de la represión fueron decisivas para la fracasada tentativa de golpe de estado liderada por el entonces teniente coronel Hugo Chávez Frías en 1992 y la posterior fundación del movimiento bolivariano, que instalaría a su líder en el poder en 1999.

197 Este nuevo “clima político” queda elocuentemente reflejado en el conjunto de trabajos incluidos en *Resistencias sociales. De Seattle a Porto Alegre*, de José Seoane y Emilio Taddei (comps.) (Buenos Aires: CLACSO, 2001).

un significativo desplazamiento hacia la izquierda del centro de gravedad de la política latinoamericana: consolidación de la Revolución Bolivariana en Venezuela, elección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil (2002), de Néstor Kirchner en la Argentina (2003), Tabaré Vázquez y el Frente Amplio en Uruguay (2004), Evo Morales en Bolivia (2005) y Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua, ambos en 2006, y Fernando Lugo en Paraguay, en 2008. Este impulso ascensional llegaría a su apogeo con la derrota del ALCA en la Cumbre de Presidentes de las Américas de Mar del Plata, en noviembre de 2005.

El reverso dialéctico de este ciclo expansivo de las luchas populares está dado por la paralela implementación de una legislación antiterrorista destinada a ampliar el rango de comportamientos caracterizados como “terroristas” y a endurecer considerablemente las penas aplicadas a quienes, según la muy laxa definición de estas nuevas leyes promovidas por Washington, puedan ser acusados de tales. Una especialista norteamericana, Beth Elise Whitaker, comprobó que desde la sanción de la Ley Patriótica en Estados Unidos (promulgada el 24 de octubre de 2001), al menos 33 países habían introducido una legislación antiterrorista, y que la presión ejercida por Washington para aprobar esas leyes había sido considerable. Según esta autora, existen notables paralelismos entre estas leyes, principalmente en países del Tercer Mundo, con la Ley Patriótica, en el sentido de que en todos los casos se expanden considerablemente los poderes coercitivos del Estado, se procura optimizar el intercambio de información entre las diferentes ramas y agencias del aparato represivo, y se establecen plazos más largos de detención para los sospechosos, a la vez que se endurecen las sentencias para quienes sean condenados¹⁹⁸. En línea con lo anterior, un estupendo análisis de Stella Calloni sobre la Ley Patriótica promovida por la administración Bush afirma que “la lista de violaciones a los derechos humanos que escenifica la ‘Patriot Act’ es inmensa. No sólo significó poner bajo control y vigilancia –con impunidad total– a la población estadounidense, con posibilidad para los servicios de inteligencia de invadir la propiedad privada, anular las autonomías universitarias, permitir las cárceles secretas, los jueces sin rostro, la detención y desaparición por tiempo indeterminado de sospechosos, pasibles de ser interrogados con los métodos que sus captores crean necesarios. También autorizaba [...] mantener campos de concentración como los de Guantánamo, el secuestro de cualquier persona tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, su traslado ilegal de un país a otro, sin

198 Ver su “Exporting the Patriot Act? Democracy and the ‘war on terror’ in the Third World” en *Third World Quarterly*, Vol. 28, Nº 5, 2007, pp. 1017-1032.

posibilidad de defensa”¹⁹⁹. En ese mismo texto, Calloni observa que en marzo de 2005, ya bajo la presidencia de Néstor Kirchner, la Cámara de Diputados de la Argentina “aprobó dos leyes contra el terrorismo reclamada por Estados Unidos abriendo un camino oscuro, porque el conjunto de las normas pueden favorecer la instalación de formas dictatoriales o gobiernos de facto”. La autora destaca con razón que la aprobación de esas leyes tuvo lugar bajo la fuerte presión de la Casa Blanca, que incluyó una gira por la región de Donald Rumsfeld, quien por entonces se desempeñaba como secretario de Defensa. Mediante la primera se habilitaba la aplicación en la Argentina de lo establecido por la Convención Interamericana contra el Terrorismo de la OEA, aprobada en Barbados en 2002. Por la segunda, se convalidaba el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, votado por la ONU el 9 de diciembre de 1999. Pero, al igual que en el resto de América Latina, la aprobación de esas dos leyes no sació los apetitos del imperio. Como recuerda Emilio Marín, luego vino una tercera, y posteriormente una cuarta, aprobada prácticamente a libro cerrado y sin debate serio en diciembre de 2011²⁰⁰. Como concluye Calloni, con estas leyes –y las que todavía vendrán!– Washington diseña una estrategia similar a la que “se impuso durante el reinado de la Doctrina de Seguridad Nacional (de Estados Unidos) en el marco de la llamada ‘Guerra Fría’ y que sembró de dictaduras el continente”²⁰¹.

Por supuesto, lo que hemos descripto para la Argentina se aplica por igual, y a veces con rasgos aún más marcados, a la mayoría de los países de América Latina; Colombia, Chile y Perú, por ejemplo²⁰². En todo caso, y retomando el hilo de nuestra argumentación, durante la segunda mitad de la primera década de este siglo la resistencia popular perdió buena parte de su impulso original, dando inicio a un ciclo de desmovilización y reflujo. No quiere esto decir que hubieran cesado las luchas; protestas y resistencias de los pueblos en contra de la renovada agresividad militar, económica y comercial del imperialismo. Pero aquellas carecían de la fuerza, la organicidad y la gravitación que exhibían apenas unos años antes. Vista en perspectiva, la segunda mitad de la primera década del siglo es una etapa de estancamiento, cuando no

de abierto retroceso, de los movimientos en la mayoría de los países de la región. Sin embargo, ese ciclo fue de corta duración, porque las tentativas golpistas, fracasadas en Bolivia y Ecuador, desgraciadamente exitosa en Honduras y Paraguay, o desestabilizadoras, como las de Argentina a partir de 2008, junto con las tensiones originadas por la exacerbación de la crisis general del capitalismo en ese mismo año y –en algunos países de Sudamérica– la conmemoración del bicentenario de la independencia precipitaron el relanzamiento de la movilización política, la conflictividad social y el activismo de los movimientos sociales. Sin los bríos de antaño, tal vez, pero como indicación clara de que se estaba iniciando un nuevo período, en donde las grandes movilizaciones estudiantiles en Chile y Colombia y las luchas contra la megaminería a todo lo largo de la cordillera de los Andes tomarían decisivamente el papel de la vanguardia.

Estos indicios parecerían señalar que, en el 2012, estaríamos en la fase inicial de un nuevo ciclo ascendente, cuya duración, intensidad y consecuencias políticas es imposible por ahora de pronosticar. Pese a los recaudos que exige el asunto, podría decirse que la gran mayoría de estas recientes movilizaciones tienen un signo similar: son claramente opuestas al neoliberalismo y, en no pocos casos, también al capitalismo, lo cual es sumamente alentador. Esta tendencia es congruente con los resultados que periódicamente arrojan las encuestas de opinión pública en América Latina, y que demuestran que apenas poco más de un cuarto de la población se declara satisfecho con el funcionamiento de la economía de mercado, una cifra claramente minoritaria que, sin embargo, no mueve a ningún gobierno a convocar a un plebiscito para oír la voz del pueblo, tomar nota de su mandato y actuar en consecuencia²⁰³.

No obstante –más allá del heroísmo tantas veces demostrado y de su abnegación militante–, se debe evitar el endiosamiento de los movimientos sociales o caer postrados ante su representatividad o

203 Ante la pregunta específica sobre cuán satisfecho se encuentra el entrevistado con el funcionamiento de la economía de mercado, las cifras de los que manifestaban estar “más bien satisfechos” o “muy satisfechos” fueron del 24% en 2002, 16% en 2003, 19% en 2004 y 27% en 2005. Ver “Informe 2005”, de Latinobarómetro (Santiago: Latinobarómetro, 2005) pág. 63. Los redactores del Informe a lo largo del tiempo no llegaban a ocultar su decepción por tan baja legitimidad de la economía de mercado. En los últimos años la pregunta sencillamente fue eliminada, al paso que se mantuvo otra, sumamente dirigida e inductora de respuestas positivas por parte de los entrevistados, que con aparente neutralidad solicitaba su opinión acerca de la siguiente frase: “La economía de mercado es el único sistema con el que [país] puede llegar a ser desarrollado”. Quienes estaban “muy de acuerdo” o “de acuerdo” (ante una pregunta tan sesgada e inductora como esa!) sumaban el 56% en la medición de 2011. Ver el “Informe 2011” (Santiago: Latinobarómetro, 2011) pág. 92.

199 Ver “El tablero de la intervención de Estados Unidos en América Latina”, de Stella Calloni, 3 de noviembre de 2008, en <<http://cetedo.org/leer.php/7137735>>.

200 Ver “Por pedido de Washington, sale la cuarta ley antiterrorista”, de Emilio Marín, en <www.laarena.com.ar/opinion-por_pedido_de_washington__sale_la_cuarta_ley_antiterrorista-68625-111.html>.

201 Stella Calloni, “El tablero”, op. cit.

202 Al respecto, ver <http://ecomapuche.com/ecomapuche/index.php?option=com_content&view=article&id=153:redazione-adital&catid=43:noticias-espanol&Itemid=59>.

democratismo interno. Los males que aquejan a muchos partidos de izquierda también los padecen los movimientos, si bien no de igual manera o con la misma intensidad. Pero allí también pueden encontrarse vicios tan perniciosos como el verticalismo, el burocratismo, el sectarismo, los personalismos, etcétera. Por eso no se trata de caer en una actitud maniquea, del tipo: movimientos sociales = lo bueno, lo noble, lo sano versus los partidos políticos = lo malo, lo innoble, la patología. Hoy es más que nunca necesario superar ese esquematismo y enfrentar la realidad sin vendas en los ojos.

Enseñanzas de la historia reciente

De acuerdo con lo que hemos señalado en reiteradas oportunidades, existen varias lecciones que se desprenden de este abrupto renacimiento de las insurgencias populares en América Latina. En primer lugar, la impostergable necesidad que tienen los partidos políticos, animados por su afán de consolidar un proyecto emancipatorio, de concebir e implementar una estrategia de poder que trascienda los estrechos límites de la mecánica electoral. La evidencia de estos años, y no sólo en América Latina, enseña que no se puede pretender transformar radicalmente un orden social estructuralmente injusto y predatorio con las solas armas disponibles en la escena electoral²⁰⁴. Subrayamos eso de “transformar radicalmente” porque no se debe olvidar que nuestra región es la que presenta la más injusta distribución de ingresos y riquezas del planeta. Por lo tanto, no será con medias tintas ni con políticas tibias como se resolverá esta situación. La burguesía, por otro lado, jamás obra con tal ingenuidad y nunca despliega una táctica única y, mucho menos, en un solo escenario de lucha como el electoral.

Por el contrario, su presencia en ese terreno se combina con otras iniciativas desplegadas en diferentes ámbitos institucionales: huelgas de inversiones, fuga de capitales, *lock-outs*, presiones sobre los dirigentes estatales, articulación con aliados internacionales que refuerzan su gravitación local, control de los medios de comunicación y, más generalmente, de los “aparatos ideológicos”, mediante los cuales pueden lanzar efectivas “campañas de terror” para intimidar o atemorizar votantes, contubernios con las fuerzas armadas, cooptación de dirigentes populares, corrupción de funcionarios públicos y legisladores, *lobbies* de diverso

204 Sobre el tema de “cambiar el mundo” ver la propuesta de John Holloway, *¿Cómo cambiar el mundo sin tomar el poder?* (Buenos Aires: Herramienta, 2002), y la que se encuentra en sus antípodas, en la obra de Eric Hobsbawm, *Cómo cambiar el mundo* (Barcelona: Crítica, 2011). Hemos examinado este tema y criticado las tesis de Holloway en nuestro *Reflexiones sobre el poder, el Estado y la revolución* (Córdoba: Espartaco Córdoba, 2007).

tipo, movilización de masas; todo lo cual configura una estrategia integral de acumulación y conservación del poder que ni remotamente se circunscribe, como suele ocurrir con los partidos populares, a lo que pueda acontecer en la arena electoral. Es cierto que para desplegar una estrategia tan omnicompreensiva como esta se requiere de una serie de recursos –materiales, organizacionales y simbólicos– que ninguna fuerza popular tiene fácilmente a su disposición. Pero también es cierto que si los partidos de izquierda quieren cambiar el mundo, y no sólo dar un lastimero testimonio de su injusticia y perversión, tendrán que demostrar que son capaces de concebir y aplicar estrategias más integrales que combinen, junto con la electoral, otras tácticas y formas de lucha²⁰⁵.

Este es precisamente el terreno en el cual los movimientos sociales han demostrado una creatividad superior a la exhibida por las organizaciones políticas. Los acontecimientos de los últimos años en la región enseñan que aquellos han adquirido una inédita capacidad para desalojar del poder a gobiernos antipopulares, soslayando los mecanismos establecidos constitucionalmente que, no por casualidad, se caracterizan por su fuerte prejuicio elitista y por un *ethos* que, a falta de mejor palabra, podríamos llamar como fuertemente “demofóbico”, es decir, caracterizado por una intensa fobia al pueblo. Para la cultura política dominante en las así llamadas democracias latinoamericanas de clara inspiración liberal, la política es un asunto de elites y de instituciones, no de pueblos movilizados y de gentes en las calles, y la ciudadanía no debe inmiscuirse en las transacciones y componendas realizadas por los caballeros en cuyas manos descansa el gobierno. Por eso, la legitimidad de la democracia es tan baja en nuestros países. No es que, como algunos equivocadamente piensan, producto del atraso los latinoamericanos no valoremos la democracia. Lo que ocurre es que aquello que las clases dominantes y sus representantes políticos pretenden hacer pasar por democracia no es sino una perversa plutocracia, a la que designan con el nombre de democracia con la vana pretensión de ocultar que es un gobierno de los ricos, por los ricos y para los ricos²⁰⁶.

205 El tema de las formas de lucha y las vías de la revolución es un clásico de la tradición marxista. En América Latina, Rodney Arismendi fue quien realizó un minucioso trabajo de exégesis del pensamiento de Marx, Engels y Lenin, y lo volcó en su *Lenin, la revolución y América Latina* (México DF: Grijalbo, 1974) pp. 95-262. Ver asimismo *La estrategia y táctica socialista: de Marx y Engels a Lenin*, de Theotonio dos Santos y Vania Bambirra (México DF: Era, 1980). Hemos abordado esta temática también en sendos estudios introductorios al *¿Qué hacer?*, de Vladimir I. Lenin (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2004) y *¿Reforma social o revolución?*, de Rosa Luxemburgo (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2010).

206 Sobre este particular consultar nuestro ya citado *Aristóteles en Macondo*. Sobre la baja legitimidad de las democracias realmente existentes en la región, no de la idea

Pero existe una segunda lección que también es preciso tener en cuenta y que nos enseña que esta activación saludable de las masas fracasó a la hora de construir una alternativa política propositiva, es decir, que no sólo fuera reactiva y pudiera derrocar a gobiernos antipopulares, sino que también condujera a la superación del neoliberalismo y la inauguración de una etapa posneoliberal. La insurgencia de las clases subalternas adoleció de un talón de Aquiles fatal que frustró esa posibilidad, resultante de la convergencia de tres fenómenos íntimamente relacionados: (a) la fragilidad organizativa; (b) la inmadurez de la conciencia política, y (c) el predominio absoluto del espontaneísmo como modo normal de intervención política.

(a) En efecto, la indiferencia suicida frente a los problemas de la organización popular, la conciencia y la estrategia y la táctica de lucha plantea numerosos interrogantes. Para los clásicos del marxismo—especialmente Lenin y Rosa Luxemburgo, más allá de sus diferencias—, el asunto de la organización era una cuestión política de extraordinaria importancia para el movimiento popular. El primero escribió más de una vez que la organización “es la única arma de que dispone el proletariado”. Cabe preguntarse, entonces: ¿cuáles serían las formas organizativas más apropiadas que requiere la lucha popular en el contexto del capitalismo contemporáneo y en la coyuntura particular de cada uno de nuestros países? ¿Cómo se articulan esas formas entre sí, para potenciar la eficacia de los proyectos emancipadores? ¿Cuál es el papel que les cabe a los partidos, los sindicatos, la gran diversidad de movimientos sociales, asambleas populares, piquetes, “juntas de buen gobierno” zapatistas, u otras formas precolombinas—importantes en países como Bolivia, Ecuador y Perú—de organización como las que aún existen en el mundo andino? ¿Cómo asegurar que las reivindicaciones canalizadas por estas diversas estructuras organizativas se sinteticen en un proyecto global que les otorgue coherencia y eficacia? Obviamente, es imposible ofrecer una respuesta positiva desde la teoría. Lo que sí se puede afirmar, en cambio, es que el “culto a la espontaneidad” verificado en algunas situaciones nacionales, como la Argentina de las jornadas de diciembre de 2001 y su consigna “¡Que se vayan todos!”, demostró ser de una previsible esterilidad. La fulminante irrupción de las masas, en la noche del 19 de diciembre, y los fieros combates escenificados, sobre todo, mas no exclusivamente, en la Ciudad de Buenos Aires y que tuvieron un costo de

38 vidas precipitaron la renuncia del presidente De la Rúa. No obstante, poco tiempo después “las cosas volvieron a su lugar”: se restableció casi intacto el sistema de dominación, obra que demostró la consumada habilidad para esa clase de tareas del por entonces presidente Eduardo A. Duhalde; la clase política, enterrada en las catacumbas durante los sucesos de diciembre, comenzó a ensayar un cauteloso retorno en los meses posteriores; y la política económica prosiguió su curso, con leves, muy leves modificaciones. La moderada y prolija gestión del ministro de Economía de Duhalde, Roberto Lavagna, es una prueba irrefutable de la continuidad del proyecto neoliberal, si bien con algunos retoques marginales. El resultado más perdurable de la insurgencia popular fue una reconfiguración del sistema de partidos, en la que la Unión Cívica Radical dejó de ser una fuerza nacional y quedó convertida en un partido político con presencia en unas pocas provincias, pero sin la menor posibilidad de volver a constituir por sí sola una opción política en el plano nacional; el Frente País Solidario (FREPASO), que de la mano de Carlos “Chacho” Álvarez había sido el principal artífice de la Alianza, desapareció de la escena política sin dejar rastros, y el peronismo se convirtió en una laxa confederación de caudillos regionales pero que, frente a la disgregación imperante, prevalece sin contrapesos en la política nacional. Esto es así en virtud de tres factores: primero, la enorme gravitación de la figura presidencial en un país hiperpresidencialista y de asfixiante centralismo como la Argentina; segundo, la capacidad del Ejecutivo nacional para—mediante variables combinaciones de persuasión y coerción, aceitadas por una discrecional utilización de los recursos del Tesoro—disciplinar a sus aliados y someter a sus enemigos; y finalmente, la persistencia de una vieja tradición peronista, el “verticalismo”, que se traduce en un impulso irresistible a someterse al liderazgo del jefe, sin importar para nada el rumbo y la orientación de las políticas que lleve a cabo. Si Menem reconvierte al peronismo en un neoliberalismo plebeyo, la tradición del verticalismo le asegura la fidelidad de sus seguidores; si luego Cristina Fernández de Kirchner exalta las virtudes del neokeynesianismo, la respuesta será la misma. Esta configuración de factores le otorga al peronismo una ventaja prácticamente imbatible en las urnas. Por consiguiente, si antes de 2001 el sistema partidario argentino giraba en torno a la bipolaridad “peronismo-Alianza” y, antes aún, “peronismo-radicalismo”, después de este año el sistema ha adquirido una fisonomía claramente unipolar que no es amenazada, hasta hoy al menos, ni por izquierda ni por derecha. Si la revuelta popular amagó por momentos hacer saltar por el aire al modelo neoliberal, con el paso del tiempo esa expectativa demostró ser totalmente ilusoria, porque los fundamentos profundos del neoliberalismo—incapacidad (o falta de voluntad) del Estado para regular los mercados, extranjerización de la economía, regresividad tributaria, hegemonía del

democrática, ver también los sucesivos informes de Latinobarómetro. No es casual, por último, que publicaciones del *establishment* como *The Economist* y *The Atlantic* hayan comenzado a mostrar su preocupación por el vigor de las tendencias plutocráticas evidenciadas en los capitalismos democráticos en fechas recientes.

sector financiero, pobreza, desigualdad socioeconómica, vulnerabilidad externa, etcétera— mantienen su plena vigencia, algo que pretende ser negado por el “relato oficial”, que vanamente trata de escamotearlos de la vista del público. Vale aquí la clásica observación de Lampedusa en *El gatopardo*: “Algo tiene que cambiar para que nada cambie”²⁰⁷.

(b) En relación con el tema de la conciencia radical y emancipatoria, por no decir revolucionaria, el problema que se plantea es el de cómo lograr que los movimientos desarrollen un tipo de conciencia que les permita trascender los límites que les impone la inmediatez espontaneísta. No está de más recordar, una vez más, la vigencia del clásico *dictum* de Lenin, cuando afirmó que “sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria”. Los estómagos más delicados pueden sustituir la palabra “revolucionaria” por otra menos indigesta, como “emancipatoria”, pero no importa: en ausencia de tal teorización, difícilmente podrá haber prácticas de masas emancipatorias o revolucionarias. Sólo una teoría que diga y demuestre que otro mundo es posible persuadirá a las masas a actuar; ante la ausencia de una tal teoría la respuesta ha sido la resignación y la desesperanza.

Por supuesto, tampoco aquí existen respuestas rotundas por lo positivo. Si, como suele decirse, el mal llamado “modelo kautskiano” de la conciencia radical introducida presuntamente “desde afuera” por intelectuales revolucionarios profundamente imbricados en las luchas revolucionarias ha fracasado, ¿podría afirmarse que la estrategia gramsciana de construcción de contrahegemonía desde las trincheras mismas de la sociedad civil ha triunfado? Se trata, como puede verse, más que de certidumbres, de preocupaciones abiertas y grandes interrogantes, cuyo tratamiento es imprescindible a la hora de encarar un proyecto de refundación democrática. Este difícilmente podrá triunfar si es que antes no se prevalece en aquello que, siguiendo a Martí, Fidel ha dado en llamar “la batalla de ideas”. En el crepúsculo de su corta vida, el primero había dicho que “de pensamiento es la guerra que se nos libra.

207 Sobre los elementos de continuidad del kirchnerismo con el modelo neoliberal, implantado por la dictadura genocida de 1976 y profundizado por el menemismo en la infausta década del noventa, ver mi “Néstor Kirchner y las desventuras del ‘centro-izquierda’ en la Argentina”, cuya versión completa se encuentra en <http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/nelstor-kirchner-desventuras-centro-izquierda-argentina/id/53239837.html>. Sobre la coyuntura, ver varias de mis notas, entre ellas, “Argentina, 2012: ¿qué hacer, y cuándo? Los desafíos de Cristina”, “Cristina recargada: notas sobre las elecciones primarias en Argentina”, “¡Harto de escuchar que ‘hay que profundizar el modelo!’” y “Más sobre la exhortación a ‘profundizar el modelo’”, todos ellos en <www.atilioboron.com.ar>.

Ganémosla a fuerza de pensamiento”. Toda la concepción gramsciana de la construcción de la contrahegemonía guarda un notable parentesco con las primeras intuiciones martianas. En efecto, ¿cómo hacer que las masas populares se lancen a la conquista del poder estatal sin estar previamente convencidas de que tal empresa es posible? Que, como en sus mejores momentos decía el Foro Social Mundial, otro mundo es posible, además de necesario. Convencidas, además de la importancia estratégica de la conquista del poder que, a juicio de todos los grandes revolucionarios —desde Marx y Engels hasta Fidel y el Che, pasando por Lenin, Rosa, Trotsky, Gramsci, Mao, Ho Chi Minh—, es el problema central de la revolución. Pero tal convencimiento no es automático ni fácilmente adquirible. Es por eso que pese al resonante fracaso de las fórmulas económicas del neoliberalismo —que ni hicieron crecer nuestras economías como cuando estas transitaban por los “rumbos equivocados” del estatismo y el dirigismo de los años de la posguerra, ni demostraron tener la menor capacidad de redistribuir la riqueza acumulada por las clases propietarias—, la persistencia del neoliberalismo encuentra uno de sus factores explicativos en la fenomenal victoria ideológica obtenida a partir de la década del ochenta del siglo pasado, cuyo impulso llega hasta nuestros días. Victoria en la crucial “batalla de ideas”, que instaló en el imaginario popular la convicción de que el Estado es fuente de todo tipo de ineficiencias y corruptelas, que la empresa privada es la depositaria de las virtudes técnicas y morales, y que la mejor manera de garantizar el progreso económico es desmantelando al primero por la vía de las privatizaciones, la desregulación, la apertura comercial, la reducción del tamaño y funciones del Estado, y fortaleciendo, en cambio, los mercados, ámbitos privilegiados de la racionalidad económica y honestos e imparciales asignadores de ganancias y pérdidas. El papel de los grandes medios de comunicación, electrónicos e impresos, controlados casi absolutamente por los bloques dominantes de nuestros países, fue de fundamental importancia para consolidar la credibilidad del dogma neoliberal. Si a ello se le agrega la confusión existente en las filas de la izquierda, oscilando entre una reivindicación nostálgica y absolutamente acrítica del pasado y un derrotismo disfrazado de falso “realismo” que conducía a la resignación política frente a los embates de la globalización neoliberal, en el plano de la conciencia popular los resultados difícilmente podrían haber sido mejores.

(c) Por último, en relación con la cuestión de la estrategia y táctica, digamos que pese a la reconfiguración de los sujetos sociales —producto, entre otras cosas, de las transformaciones sufridas por las relaciones capitalistas de producción que pulverizaron y desorganizaron el campo popular a la vez que homogeneizaron y organizaron a las clases dominantes—, la adopción de una estrategia y una táctica

adecuadas sigue siendo un asunto de primordial importancia. Esta divergencia entre lo ocurrido a “los de arriba” y “los de abajo” puede sintetizarse, de manera muy esquemática, en la contraposición entre el Foro Social Mundial nacido en Porto Alegre y el Foro Económico Mundial que se reúne anualmente en Davos. Mientras que el primero exhibe toda la riqueza de las “diferencias” –de nacionalidades, género, etnias, lenguas, ocupaciones y profesiones, religiones, educación, ideologías políticas, formatos organizativos, etcétera, que constituyen el conglomerado popular mundial–, la reunión en la pequeña ciudad de los Alpes suizos hace de la uniformidad de posiciones y coherencia de perspectivas un culto cuidadosamente preservado. Y mientras en 2003 el Foro Social Mundial, por ejemplo, fue incapaz de pronunciarse formalmente condenando la inminente agresión que el imperialismo norteamericano perpetraría en Irak, so pretexto de que una declaración política de ese tipo convertiría al fsm en una nueva Internacional Comunista, con la indeleble marca del estalinismo en sus entrañas, la Cumbre de Davos seguía convocando a gobernantes de todo el mundo para “bajarles línea” y hacerles saber que los gigantes oligopolios allí reunidos esperaban de su parte la continuación y profundización de las políticas del Consenso de Washington. Por último, mientras que el Foro Social Mundial rechazaba explícitamente cualquier tentativa de siquiera pensar en un modelo organizativo que potenciara la gravitación de los movimientos populares en el escenario internacional, o al menos una elemental coordinación de los numerosos frentes de lucha ¡contra los mismos enemigos: las transnacionales!, el Foro Económico Mundial de Davos perfeccionaba sus diagramas organizativos para reforzar aún más la gravitación de sus intereses a lo ancho y largo del planeta.

En otras palabras, en el campo de los movimientos sociales, las cuestiones de la estrategia y la táctica no gozan del favor de la época, pues son erróneamente percibidas como asuntos que sólo revisten interés para algo tan anacrónico, según sus intelectuales orgánicos, como los partidos políticos. Esto se percibe con toda nitidez en el plano teórico si se examina la obra de Hardt y Negri, *Imperio*, que supo tener un momento de gloria (afortunadamente efímero) hace algunos años atrás en las primeras versiones del Foro Social Mundial. En *Imperio*, los movimientos sociales son concebidos como expresiones infinitas de la multitud y esta, por su carácter descentrado, desterritorializado, molecular y nomádico, es radicalmente incompatible con cualquier planteamiento de estrategia y táctica. Para Hardt y Negri, tales preocupaciones corresponden a una forma de actuación política perteneciente a una época históricamente superada, la época de los Estados nacionales y las clases sociales. Por lo tanto, se hace un culto a la supuesta rebeldía de

las multitudes nómades, algo que debería ser sometido a cierta forma de corroboración práctica o empírica, y se abandona por completo toda preocupación por la organización, la estrategia y las tácticas de lucha, con los resultados previsibles. Algo similar acontece con la obra de John Holloway, que, además, nos invita a dejar de lado toda pretensión de conquistar el poder, de lo cual se desprende la superfluidad de cualquier discusión sobre estrategia y táctica encaminada a ese fin. Es preciso señalar que, a diferencia de Hardt y Negri, Holloway sigue siendo un crítico implacable del capitalismo y un férreo proponente de la sociedad comunista. Hemos criticado reiteradamente estas versiones contemporáneas del romanticismo político –que desembocan en la impotencia política, la resignación y la claudicación–, de modo que no insistiremos en ello aquí. Digamos simplemente que, contrariamente a estas teorizaciones de moda, el problema de la estrategia y la táctica de las clases subalternas está indisolublemente unido a las perspectivas de su propia emancipación, algo impensable al margen de una correcta estrategia encaminada hacia la conquista del poder. Esta no ocurrirá por una casualidad histórica, o como una concesión graciosa de las clases dominantes. Por lo tanto, se trata de una cuestión fundamental. Pero la victoria ideológica del neoliberalismo, que también se ha sentido en las filas de la intelectualidad de izquierda, ha suprimido todas estas cuestiones de la agenda de los partidos y movimientos interesados en la emancipación social, dando origen a una serie interminable de frustraciones²⁰⁸.

208 Sobre el tema de la estrategia y la táctica de las luchas populares hemos escrito un breve texto: “Strategy and Tactics in Popular Struggles in Latin America”, en *Socialist Register 2013* (Londres: Merlin Press, 2012). Próximamente daremos a conocer la versión en castellano de este trabajo.